

La Corte Penal Internacional (CPI) es la primera corte permanente de la historia de la humanidad. Sus objetivos son promover el Estado de derecho, castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y contribuir desde la acción de la comunidad internacional a erradicar la impunidad en el mundo. Fue establecida el 17 de julio de 1998, cuando 120 estados aprobaron el Estatuto de Roma, pero entró en vigencia apenas el 1 de julio del 2002, con la ratificación del Estatuto. En el artículo que sigue, un recuento de una reunión de la CPI realizada en octubre próximo pasado.

Corte Penal Internacional: Por la participación de las víctimas

Sofía Macher



Jueza Elizabeth Odio (al centro) ocupa una vicepresidencia en la CPI.

El 22 de octubre último, la Oficina del Registrador de la Corte Penal Internacional (CPI) organizó una reunión de trabajo con expertos de diferentes organizaciones (entre las que se encontraba el IDL) para discutir sobre procedimientos para la participación de víctimas en los procesos que iniciará la CPI.

La reunión, realizada en La Haya, Holanda, fue organizada por la Unidad de Víctimas y Testigos que se encuentra bajo la responsabilidad del Registrador de la CPI, el señor Bruno Cathala, quien la dirigió. Asistieron, además de los quince invitados, cinco jueces, entre los que se encontraba la jueza Elizabeth Odio,

Sofía Macher, ex comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

costarricense, quien ocupa una vicepresidencia de la CPI.

La reunión se propuso recibir sugerencias prácticas en relación con los complejos temas de la participación de las víctimas. Asesoría para superar las dificultades en el cumplimiento del mandato en relación con la difusión que pueda llegar a las víctimas, garantizar su acceso y su representación ante la Corte. Definir futuras prioridades de estudio, investigaciones y colaboración. Crear una red de expertos para futuras colaboraciones.

Las cuatro sesiones

Dividida en cuatro sesiones, la primera estuvo dedicada a la elaboración de una estrategia de comunicación de la CPI con las víctimas; desde los contenidos de los materiales que se producirán hasta la garantía de crear una comunicación genuinamente multicultural, criterios y esquema para las relaciones de la CPI con las organizaciones de la sociedad civil.

La segunda sesión estuvo dedicada al acceso efectivo de las víctimas a la CPI para garantizar procesos realmente participativos, cuáles podrían ser los mecanismos que la CPI puede establecer para el

acceso directo de las víctimas a la Corte, su participación durante los procesos y los mecanismos por establecerse para la ejecución de las reparaciones. Se conversó de temas desde los formatos para la aplicación de casos, procedimientos, niveles de secrecía, cómo enviar las notificaciones, qué tipo de documentación se deberá solicitar a las víctimas para reclamar una reparación y medidas necesarias para la protección de las víctimas.

La tercera sesión se dedicó a los temas relacionados con la representación legal de las víctimas. Si se exigirá algún tipo de requisito a los abogados, garantías de representantes de las diferentes regiones, manejo de las diferentes lenguas, diferentes sistemas legales, cuáles serán los criterios para dar apoyo financiero a los representantes legales.

La cuarta y última sesión se dedicó a los criterios de agrupación de casos especialmente en las violaciones masivas de los derechos humanos. Cómo proceder en relación con la representación legal cuando se agrupan varios casos y, también, cómo atender la demanda de reparaciones colectivas.

Durante la reunión los diferentes participantes expusieron sus ideas de acuerdo con su experiencia. No se sacaron conclusiones. Se tomó nota de todas las sugerencias, y se producirá una ayuda memoria de la reunión. Con este documento continuaremos la discusión. Pero no será necesaria una nueva reunión hasta dentro de seis meses, porque las relaciones se establecerán utilizando la internet.

La clave de esta reunión es la decisión de la CPI de construir canales de consulta y participación de organismos de la sociedad, que recogerán la experiencia de personas e instituciones que tienen una relación directa con las víctimas. Se debe garantizar que la CPI sea un órgano activo, relacionado directamente con el campo y que no se convierta en un órgano burocrático y, sobre todo, lejano del mundo de las víctimas.

Nos parece muy importante que la CPI tenga iniciativas como esta, que buscan recoger la experiencia de muchos años de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de derechos humanos, pues ellas están en contacto permanente con las víctimas.

Cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos de lesa humanidad, generalmente estamos hablando de personas pobres, excluidas, sin acceso a la información y a la justicia; que muy probable-

La clave de esta reunión es la decisión de la CPI de construir canales de consulta y participación de organismos de la sociedad, que recogerán la experiencia de personas e instituciones que tienen una relación directa con las víctimas.

La participación de las víctimas es de gran importancia para que la CPI cumpla realmente con su mandato de restauración de la justicia penal a escala nacional.

mente viven en lugares alejados de las grandes ciudades. La participación de las víctimas es de gran importancia para que la CPI cumpla realmente con su mandato de restauración de la justicia penal a escala nacional.

En el Estatuto de Roma se le da un gran peso a la protección de los derechos e intereses de las víctimas y testigos. La participación de la víctima debe ser garantizada desde el primer momento y en todas las etapas del proceso judicial, ya sea individual o colectivamente. La Corte está obligada a garantizar que las víctimas tengan apoyo legal y, si fuera necesario, también financiero.

La CPI es el primer tribunal judicial de la historia de la humanidad que tiene la atribución de ordenar la reparación a una víctima o a sus beneficiarios, ya sea por medio de la restitución, indemnización o rehabilitación. Y en el caso de que el sentenciado no esté en la capacidad de hacerlo, la Corte debe tener un Fondo de Apoyo a Víctimas capaz de satisfacerlas.

El Estatuto de Roma obliga a la Corte a apoyar a las víctimas y testigos durante el proceso judicial y a adoptar medidas de protección cuando esto sea necesario. Asimismo, debe poner en práctica medidas

apropiadas de protección física y mental, teniendo en cuenta la edad de la víctima, su género, discapacidad, salud y la naturaleza del crimen.

Al ser una institución encargada de velar por el debido proceso, debe proveer una apropiada defensa con tiempo y recursos adecuados para que se prepare libremente para las audiencias públicas sin demoras, asegurando también la protección y derechos del acusado con asistencia legal y apoyo financiero si fuera necesario.

Acciones futuras

En el 2004 la Corte espera atender situaciones de conflicto en el mundo, que podrían ser casos. Se piensa iniciar tanto con el proceso de investigación cuanto con el judicial. Se estima que se requerirá de al menos dos equipos que examinen los casos y tres equipos de investigación. Se planea que los tres equipos de investigación estén listos para iniciar su trabajo en los meses de enero, junio y octubre del 2004 respectivamente. Consecuentemente, se espera que al principio del próximo año la Corte establezca una o más oficinas de campo en los lugares o cerca de los lugares donde ocurrieron los crímenes que la Corte pretende asumir.

Desde junio del 2002 han llegado a la oficina del fiscal de la CPI más de seiscientas comunicaciones, relacionadas con un amplio espectro de tipos de crímenes cometidos en sesenta y seis diferentes países del mundo, presentados tanto por individuos cuanto por organizaciones no gubernamentales. La mayoría de ellos no cae dentro del actual mandato de la Corte. El Consejo de Seguridad de la ONU o alguno de los estados parte no han enviado ningún caso.

De los casos recibidos que sí se encuentran dentro de la jurisdicción y mandato de la Corte, la oficina del fiscal ha seleccionado el caso de la situación en Ituri de la República Democrática del Congo como una de las situaciones más urgentes por ser atendidas a partir de la información que ya se tiene y de otra que ya ha sido solicitada, y luego de pasar la revisión de la facultad de la Corte para iniciar un caso en el Congo. La oficina del fiscal pedirá la autorización de la Cámara Prejudicial para iniciar formalmente la investigación. Uno de los tres casos podría ser Colombia.

Al 5 de setiembre del 2003, noventa y dos países ya han ratificado el Estatuto de Roma de la CPI.

Su financiamiento proviene del aporte de los estados miembros, organizaciones internacionales, individuos, corporaciones y otras entidades. ▲